



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
Sala Octava de Decisión de Asuntos
Penales para Adolescentes

MAGISTRADA PONENTE: GLORIA MONTOYA ECHEVERRI

Conducta punible: uso de documento falso

Radicado: 05 001 60 00 000 2024 00385 01

Radicado interno (2024-176)

Auto interlocutorio Nro. 287 de 2024.

Medellín, dieciocho de junio de dos mil veinticuatro.

Discutida y aprobada mediante acta Nro. 159 del 18 de junio de 2024.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, en contra del auto emitido el 22 de mayo de los corrientes, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Medellín, que no decretó la preclusión de la acción penal, en favor de Javierlimar José Borges Silva, por el delito de uso del documento falso atribuido.

ANTECEDENTES

El 7 de mayo del corriente año, según se desprende de los archivos 02 y 03 del cuaderno de primera instancia, la Fiscal 257 Seccional de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes –URPA-, solicitó la audiencia de preclusión de la acción penal por la causal 2º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el numeral 8º del canon 32 del Código Penal, argumentando que¹, con los informes allegados por el Defensor de Familia – pudo establecer con total certeza que la adolescente está siendo víctima de la trata de personas. Y que en tal virtud:

¹ Minuto 4:26 al del audio denominado “PRECLUSIÓN 05001600000020240038500 JAVIERLIMAR JOSE BROGES SILVA USO DE DOCUMENTO FALSO NI 2024-3321” del cuaderno de primera instancia.

“...esa insuperable coacción ajena, como circunstancias de inculpabilidad, bien es sabido que la atribución de la responsabilidad parte de que esa base de la conducta punible haya tenido una realización con conocimiento y voluntad. Es decir, la adolescente sabía lo que estaba realizando, cierto, pero esa coacción realizada por personas que se dedican a la trata de personas y la explotación sexual, del cual ella ha dado información en la fiscalía de adultos, ha generado que este tema por su vida y por la de su familia y por lo tanto entonces no le fuera establecido una voluntad de hacer lo contrario, entonces, en ese orden de ideas, Señoría se establece también que en la sentencia SP1657-2021 ... establece que permite afirmar que esa causal de inculpabilidad exige reunir siguientes requisitos, configuración de actos constrictivos graves, ejercidos intencional e ilícitamente por otra persona. Tenemos entonces que la adolescente en adultos, fiscalía de CAIVAS ha dado los nombres, pues así lo podría corroborar el Defensor de familia a su turno; actualidad de la coacción, esto es, que la voluntad del compelido debe ser subyugada como resultado inmediato de la violencia física o psíquica. Tenemos que la adolescente tiene discapacidad cognitiva y que viene entonces, ha establecido frente a la Defensoría de familia que se está tratando de una estructura que ha subyugado su voluntad para la explotación sexual y que fuera entonces le tramitaran directamente su [sic] o ese documento falso.

Así mismo, implica una relación biunívoca, que es el constreñimiento, esté presente y sea la causa directa del juzgamiento del sujeto activo; insuperabilidad de la coacción, es decir, que no pueda dominarse o vencerse y que sea resistible, empero a esa condición normativa fijada en el precepto es relativa, pues para establecerla debe atenderse a la gravedad del acto constrictivo. No estamos hablando, señor juez, de cualquier otro delito que no sea la trata de personas y sabemos las coacciones que se ha podido presentar en estos. Las condiciones personales del coaccionado y las posibilidades de liberarse de esa coacción por otros medios.

Entonces, en ese orden de ideas, señor juez, no le era exigible una conducta distinta a Javierlizmar [sic] de someterse a la voluntad ilícita del coaccionador y dado eso, entonces, esa responsabilidad frente a la culpabilidad, desaparecería...”².

El Defensor de Familia reconoció que la adolescente podría tener una discapacidad cognitiva y que para determinarlo se requieren de una: *“gran cantidad de estudios y de adelantos pues que se deben de hacer por parte del sistema de salud, recordando entonces que como ellos son extranjeros, la joven no tiene ni el permiso temporal de permanencia en este país; no se había tramitado por parte de la mamá...”³*; que al ingresar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes la afiliaron al sistema de salud y que en todas las valoraciones que le ha realizado pudo evidenciar que *“no entiende mayor cosa, fuera de eso, el miedo que le causa*

² Minuto 18:03 al 21:07 *ibídem*.

³ Minuto 25:40 al 25:55 *ibídem*.

toda esta situación porque su mentalidad no es tan [sic] no es la de una niña en este momento de 16 años...”⁴.

Consideró que: “... si bien como usted lo dice legalmente no está certificada una discapacidad para ella, y yo sé que se va a demorar mucho y eso lo haremos dentro del proceso de restablecimiento de derechos, pero lógicamente Javierlimar, pues no es una niña que tenga la capacidad para decir, yo voy a hacer eso y para qué lo voy a hacer. Ella simplemente era una niña que fue utilizada para poder conseguir dinero y ella en su afán y en su poca madurez, también que tiene, y en esas limitaciones, vuelvo y repito, no saben leer ni escribir; fue utilizada, fue explotada sexualmente por eso el mismo delito como tal lo trae [sic] la trae ellas [sic] como víctima y más a una niña de esta situación como es Javierlimar ...”⁵, para concluir que compartía el pedimento de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la defensora pública también coadyuvó la solicitud del ente acusador, indicando que la causal invocada es objetiva y que, al desaparecer la culpabilidad, se desvanece la conducta punible, de cara al artículo 9° del Código Penal.

A lo que aunó los principios de celeridad y la regla *pro infans*, porque la finalidad de la Ley 1098 de 2006 es la protección de los niños, niñas y adolescentes y continuar con el proceso penal desestimando el pedimento de preclusión, originaría el desgaste emocional de la adolescente y de la jurisdicción, teniendo en cuenta que el proceso penal es la *última ratio*.

DECISIÓN RECURRIDA

El funcionario de primera instancia, luego de relievare la finalidad pedagógica del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, indicó que los intervinientes olvidaron que el mismo es procesal y se funda en evidencias.

No accedió a la preclusión, porque la Fiscalía fundó su petición en la incapacidad de la joven para comprender las situaciones que la rodean y las limitaciones de su desarrollo, con apoyo en la información del Defensor de Familia; empero, no allegó la experticia requerida, como prueba válida, que diera cuenta de ello, a tono con lo

⁴ Minuto 27:11 al 27:20 *ibídem*.

⁵ Minuto 31:46 al 32:23 *ibídem*.

reglado por el canon 405 de la Ley 906 de 2004 y que por el “*retraso cognitivo*” fue coaccionada e inducida a ejecutar el acto que imputado.

La adolescente, según lo estatuido por el Código Civil se presume capaz, y con la “*ley de las guardas o de los acompañamientos*”⁶, aún las personas con discapacidad se consideran capaces.

Concluyendo en últimas que: “... *el despacho no cree que con los elementos de juicio que tenemos hasta el momento sea posible llegar a una conclusión de que la joven fue efectivamente objeto de coacción por terceros para realizar la conducta por la cual se le convocó a esta audiencia...*”⁷, pues no se ha establecido que haya sido fruto de algún tipo de presión, coacción o intimidación, de que si no hace esto pasa aquello y tal coacción, aunada a que la supuesta incapacidad mental – no acreditada –, pudiera haber influido para que actuara en un sentido u otro.

Adunando que asumir una actitud proteccionista es propia del proceso de restablecimiento de derechos y no del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y que el pedimento de la Fiscalía tampoco era viable por los principios de celeridad o en virtud de la garantía *pro infans*, porque en primer lugar se requieren pruebas de lo implorado, que brillan por su ausencia.

RECURSO DE APELACIÓN

La Fiscalía solicitó la revocatoria de lo decidido por el señor juez *a quo*, argumentando que los informes del Defensor de Familia, acorde a la competencia del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006 dan cuenta de los “*hechos vulnerables*” de los que ha venido presentando la adolescente y por los cuales fue aprehendida el 15 de marzo de 2024 en la ciudad de Medellín, al que no se le pueden restar credibilidad, siendo que su función principal es protegerla y sus declaraciones fueron rendidas bajo la gravedad de juramento que cobija a los servidores públicos.

La Ley 1098 de 2006 es un sistema diferenciado y las instituciones deben articularse, no para sancionar a los adolescentes, sino para protegerlos ante la vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que en este asunto debe

⁶ Minuto 58:24 al 58:27 *ibídem*.

⁷ Minuto 1:01:08 al 1:01:29 *ibídem*.

resguardársele a fin de que la explotación sexual de la que ha sido víctima no se siga presentando.

Concluyendo que: *“... si bien es cierto la capacidad cognitiva no se ha podido establecer frente a lo que manifestó el Defensor [sic] el Defensor de familia, no ha sido esa causal o no ha sido esa justificación la que la Fiscalía ha establecido frente a la coacción insuperable; no, la adolescente en adultos frente a lo manifestado por el Defensor de Familia, ha dado nombres, ha dado ubicación y, eso sí fue corroborado dentro del informe del Defensor de familia, la ubicación donde posiblemente se están tramitando no solo el documento falso que se le fue hallado a la adolescente, sino a las otras adolescentes que fueran aprendidas, primero el día de la aprehensión con la adolescente y segundo con otras más. Entonces, esto quiere decir, señoría, que no estamos frente a un hecho aislado de explotación sexual o una banda criminal que se dedique a buscar a adolescentes, que de pronto por su poca, [sic], por su ingenuidad y por la edad, la adolescente Javierlismar [sic] acaba de cumplir 16 años, frente al restablecimiento de derechos en el que se encuentra del ICBF, esa ingenuidad y esa, incompreensión de la licitud y de las necesidades económicas, las necesidades básicas que pueda suplir esta adolescente frente a su núcleo familiar, tenemos que tiene un acompañamiento de su madre, madre que trabaja en una tienda, seguramente en jornadas laborales arduas y que ella entonces ve la necesidad de buscar cómo ayudar a su madre a proveer en ese núcleo familiar, en ese orden de ideas, no es arbitraria la solicitud que la Fiscalía está realizando frente a esa preclusión de la adolescente, evidenciando señor juez que ha habido unos resultados probatorios obtenidos en ese proceso administrativo que se le está realizando a la adolescente...”⁸.*

La defensora pública coadyuvó lo solicitado por la Fiscalía, argumentando que para la acreditación de la discapacidad cognitiva de la adolescente, se debe tener en cuenta lo manifestado por el Defensor de Familia, quien es el que desde el primer momento en el que ingresó al Sistema de Responsabilidad Penal, percibió su discapacidad, que no sólo se puede demostrar con un dictamen pericial, porque a esa conclusión se puede arribar teniendo en cuenta la situación familiar que la rodea, lo que la llevó a las decisiones por las cuales se le juzga, sin saber si estaban

⁸ 1:29:28 al 1:31:41 *ibídem*.

bien o mal encausadas y que la coacción ajena puede demostrarse por el miedo o el desconocimiento que la adolescente tenía frente a las personas que la usaron.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO

Conforme a lo resuelto por el señor juez *a quo* y lo sustentado por la fiscal apelante, le compete a la Sala examinar si en el presente asunto, es viable la preclusión de la acción penal por la causal 2º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el numeral 8º del canon 32 del Código Penal, sabiendo que la adolescente Javierlimar José Borges Silva se vio inmersa en una aprehensión en el barrio el Poblado de Medellín, por una patrulla de la Policía Nacional, en situación de flagrancia, por el delito de uso de documento falso al que se refiere el artículo 291 del Código Penal.

Con ese norte, lo primero que ha de indicarse es que la preclusión de la investigación, a tono con lo enseñado por la Corte Constitucional en la sentencia C-920 de 2007⁹ es: *“... una institución procesal, de amplia tradición en los sistemas procesales, que permite la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la adopción de una decisión definitiva, por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, y por ende, se encuentra investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada.”*

En la forma dispuesta por los artículos 331 y 332 de la Ley 906 de 2004¹⁰, el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar, entre otros casos, cuando milite una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal; lo que efectivamente hizo el ente acusador, apalancado en el numeral 8º del artículo 32 del Código Penal, que señala que: *“No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.”*

⁹ Magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.

¹⁰ “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

Sobre dicha causal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP3515-2022¹¹, rememoró la sentencia CSJ SP 24 oct. 2007, rad. 22005, citada en CSJ SP2430-2018, 27 jun. 2018, rad. 45909, en la que se señaló que:

“Como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, la insuperable coacción ajena como causal de ausencia de responsabilidad prevista por el artículo 32, numeral 8°, de la Ley 599 de 2000 (antes causal de inculpabilidad de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 100 de 1980), para que constituya circunstancia eximente de responsabilidad debe consistir en un acto de violencia moral verdaderamente irresistible generada por un tercero, que tenga por causa un hecho absolutamente ajeno a la voluntad del agente, que lo obligue a ejecutar aquello que no quiere, sustentado en el miedo o en el temor y la voluntad de evitarse el daño amenazado.

Dicho de otra manera, la insuperable coacción ajena supone la existencia de una ‘vis compulsiva’, es decir, que la persona no procede, porque es actuada, es perfectamente determinada por esa coacción de la que no puede liberarse y que domina totalmente su voluntad que podría llevarla a actuar de una manera diversa a la que fuera fruto de su propia auto determinación que ha perdido de manera total.

En síntesis, para predicar la existencia de la insuperable coacción ajena deben concurrir los siguientes presupuestos, a saber:

- a) Que haya peligro inminente, es decir, que no sea futuro o incierto, pero sí serio o inevitable por otro medio.*
- b) Que se advierta un mal que para el violentado sea de naturaleza más grave que el que puede ocasionar con la comisión del hecho ilícito propuesto.*
- c) Que no pueda ser evitado sino realizando ese hecho prohibido por la ley, es decir, que la conducta ilícita no haya sido consentida previamente.*

En esas condiciones, la coacción se erige en el empleo de la fuerza física o síquica presente o futura sobre una persona para lograr de ella un comportamiento de acción o de omisión, que en otras circunstancias voluntariamente no realizaría.”.

Por lo que surge el siguiente interrogante: ¿quedó acreditado que la adolescente Javierlimar José Borges Silva obró bajo la insuperable coacción ajena en la comisión del ilícito que se le endilga, esto es, en el uso de documento falso¹², el 15 de marzo de la cursante anualidad, a las 4:30:00?

¹¹ Magistrado ponente Hugo Quintero Bernate.

¹² Artículo 291 del Código Penal que señala: “El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años.

Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad.”

Para zanjar la duda, debe rememorar la Sala, que la Fiscalía afianzó su pedimento especialmente en los informes elaborados por el Defensor de Familia, el 6º de mayo de los corrientes¹³, según los cuales:

“Desde el ingreso al SRPA se certificó que la joven es víctima de explotación sexual comercial, pero una vez interpuesta la denuncia penal ante la fiscalía [sic] General de la Nación sede CAIVAS Medellín, se estableció que la joven fue inducida a dicha explotación sexual comercial.

Lo anterior dado que esta adolescente evidencia una clara discapacidad cognitiva, no ha aprobado la primaria, no sabe leer ni escribir y aunque siempre ha estado bajo el cuidado de la madre, unas adultas del sector de residencia se aprovecharon de su discapacidad cognitiva, la llevaron al centro de la ciudad y le tramitaron un documento falso.

La adolescente en su entrevista forense demostró un comportamiento retraído, muy temerosa, desubicada en tiempo, mostraba dificultad para entender las preguntas, sin embargo, hizo la revelación de los hechos y certificó como las victimarias le tramitaron dicho documento en el centro de Medellín y como la usaron para usufructuarse explotándola sexualmente.

Es de anotar que la joven solo llevaba un mes en la ciudad de Medellín y la madre reporta que la joven nunca se separaba de ella por su discapacidad cognitiva pero que las últimas semanas mostraba un comportamiento rebelde e incomprensible, pero nunca se imagino [sic]” dichos hechos...”.

Y más adelante se indicó que:

“Como Defensor de Familia, adscrito al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes muy respetuosamente le informo que desde el mes de abril del 2024 han ingresado al SRPA varias adolescentes de nacionalidad venezolana por el presunto delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, todas ellas bajo el flagelo de explotación sexual comercial y/o trata de personas.

La gran mayoría explotadas, usadas y hasta esclavizadas para realizar dichas acciones que afectan la integridad personal, libertad y vida de estas. Jóvenes que ingresan al sistema de protección del ICBF con demasiados miedos y temores, no solo por ellas sino también por sus familias.

Jovencitas que manifiestan ser explotadas por bandas muy fuertemente estructuradas no solo en Colombia sino también en el extranjero, varias han referido ser amenazadas por la banda criminal del “tren de Aragua” por ello las amenazan con hacerle daño a sus familiares en Venezuela.

No obstante, lo anterior, muchas de las niñas afirman que los documentos falsos especialmente cédulas [sic] venezolanas, son elaborados en Medellín cerca a la

¹³ Obrantes en las páginas 5 – 6 y 11 a 13 del archivo

plaza Botero, por el banco de la República en una papelería, al parecer donde trabaja [sic] extranjeros venezolanos.

Luego de intentar hacer empatía con las niñas y de asegurarles que no se les obligaría a testificar, al menos aceptaron con ayuda de Google maps verificar el lugar donde las llevan a que les tomen las fotos y les tramiten dichas cédulas [sic] falsas...”.

De lo que extrajo como conclusión que la adolescente Javierlimar José Borges Silva, presentaba una discapacidad cognitiva que dio paso a que fuera coaccionada de manera insuperable por terceras personas, para la comisión del ilícito que se le endilga, con el fin último de alcanzar su explotación sexual.

De esta manera, razón le asistió al funcionario de primera instancia al negar la preclusión de la acción penal, luego de considerar que no se había acreditado de manera idónea su discapacidad cognitiva y menos aún, que hubiera obrado bajo la insuperable coacción ajena que acarrearía como consecuencia la ausencia de responsabilidad penal.

Todo porque, aunque es cierto que el Defensor de Familia, según lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 1098 de 2006¹⁴ tiene encomendado, entre otras funciones: *“adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza.”*, *“emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas.”* y *“asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes.”*, ello no implica que cuando según su criterio un adolescente presenta una discapacidad cognitiva, realmente la tenga y mucho menos que su sola afirmación baste como medio de convicción suficiente para que se finiquite el proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas procesales, ante la ausencia de mérito para sostener la acusación; sobre todo, porque cuando intervino en la audiencia en la que se profirió la providencia apelada, no fue concluyente sino dubitativo, al afirmar que podría detentar esa condición.

Es cierto que el artículo 6º de la Ley 1996 de 2019¹⁵ es claro al preceptuar que la capacidad de las personas se presume. Según ese dispositivo:

¹⁴ “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.”

¹⁵ “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.”

“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral...”

Lo que se halla acorde con el artículo 1503 del Código Civil, según el cual: *“Toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley declara incapaces.”*. Justamente en este punto adquiere mayúscula importancia la prueba pericial, que anotó el señor juez *a quo*, brillaba por su ausencia, pues ésta, según el canon 405 del Código de Procedimiento Penal *“...es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados.”*

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP2232-2021 puntualizó que: *“... la intervención del perito se justifica por los aportes que pueda hacer a la luz de una determinada disciplina, lo que se contrapone a la idea de que el experto pueda comparecer al juicio oral a dar opiniones infundadas o del mismo nivel de las que podría emitir un lego basado en su intuición.”*. Y en la sentencia SP430-2024¹⁶ fue clara en señalar que: *“Ley [sic] 906 de 2004 está orientada al abordaje más racional de la prueba pericial, orientado a evitar que cualquier conclusión expuesta por expertos en otras disciplinas sean tomadas irreflexivamente como verdades apodícticas, incluso aquellas ajenas a sus conocimientos especializados.”*, de donde resulta evidente que su oficiosidad es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran, entre otros, conocimientos científicos especializados.

Así las cosas, siendo que no se acreditó debidamente la discapacidad cognitiva de la adolescente Javierlimar José Borges Silva, menos puede decirse que el que no supiera leer o escribir o su edad la llevaron a obrar bajo la insuperable coacción ajena, que como se mencionó, requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: **(i)** que haya peligro inminente, es decir, que no sea futuro o incierto, pero

¹⁶ Magistrado ponente Carlos Roberto Solórzano Garavito.

sí serio o inevitable por otro medio; **(ii)** que se advierta un mal que para el violentado sea de naturaleza más grave que el que puede ocasionar con la comisión del hecho ilícito propuesto y que **(iii)** no pueda ser evitado sino realizando ese hecho prohibido por la ley, es decir, que la conducta ilícita no haya sido consentida previamente, porque tampoco está demostrado el ejercicio de esa fuerza o de ese poder que logró vencer la convicción de lo ilícito de su proceder.

Por consiguiente, se **confirmará** el auto emitido el 22 de mayo de los corrientes, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Medellín, que no decretó la preclusión de la acción penal, en favor de Javierlimar José Borges Silva, por el delito de uso de documento público.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Octava de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín**,

RESUELVE:

PRIMERO. – Confirmar el auto emitido el 22 de mayo de los corrientes, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Medellín, que no decretó la preclusión de la acción penal, en favor de Javierlimar José Borges Silva, por el delito de uso de documento público, de acuerdo a las motivaciones impresas en el cuerpo de esta providencia.

Contra esta decisión no proceden recursos, pues agota el objeto de la apelación.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gloria Montoya Echeverri', with a stylized, cursive script.

GLORIA MONTOYA ECHEVERRI
Magistrada

MIGUEL HUMBERTO JAIME CONTRERAS
Magistrado

LUZ DARY SÁNCHEZ TABORDA
Magistrada

Firmado Por:

Gloria Montoya Echeverri
Magistrado
Sala 001 De Familia

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Luz Dary Sanchez Taborda
Magistrado
Sala 005 De Familia
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Miguel Humberto Jaime Contreras
Magistrado
Sala 08 Penal
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **da4f01f504845c03231eda1f475e7faac13c4f86a7e6edaa24de6b4563cab010**

Documento generado en 20/06/2024 02:39:23 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>